

JOSÉ L. GÓMEZ DEL PRADO

Los nuevos mercenarios del siglo XXI

En los últimos 20 años se ha producido un extraordinario desarrollo de las empresas privadas militares y de seguridad.¹ Cada vez con más frecuencia los Estados las subcontratan para que desempeñen servicios militares y de seguridad que antes eran monopolio del Estado.² Algunos consideran que estas empresas son nuevas formas del "mercenarismo" que existía antaño y que ahora se ha transformado y potenciado con el neoliberalismo. Otros, sin embargo, estiman que dichas empresas constituyen nuevas formas que conviven junto a las tradicionales, que están en vías de extinción. Y otros piensan que las empresas privadas de seguridad son una consecuencia del sistema capitalista que ha logrado transformar al mundo en una jungla salvaje.

La incursión de las empresas privadas en asuntos militares y de seguridad se debe a muchas causas. La multiplicación de guerras y conflictos armados de ámbito nacional – surgidos después del fin de la Guerra Fría, sin la intervención ideológica de las dos antiguas superpotencias – es una de ellas. En general, los Estados en los que se producen estos conflictos son débiles, no controlan una gran parte del territorio y a menudo están a punto de derrumbarse. En esas situaciones, los Estados que antes recurrían a EEUU o a la

José L. Gómez del Prado es miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios

¹ Se las denomina empresas privadas militares y empresas privadas de seguridad en función de si sus actividades se concentran en cuestiones de seguridad (prevención del crimen, orden público, seguridad en las cárceles, en los aeropuertos, protección individual) o en cuestiones militares (logística, asesoramiento y entrenamiento militar, armamento, servicios de inteligencia y espionaje). Aunque algunas empresas responden a este criterio, hay muchas otras que proporcionan ambos servicios. En este artículo se utiliza el término más amplio "empresas privadas de seguridad" para abarcar también a las que pueden facilitar servicios militares. Estas sociedades están registradas legalmente, tienen personalidad jurídica y pueden, en algunas ocasiones, emplear a mercenarios. Pero se diferencian esencialmente de éstos en que las empresas privadas están contratadas por gobiernos o por organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Las empresas privadas de seguridad emplean sobre todo a mercenarios cuando actúan como actores no estatales armados en zonas de conflicto.

² Algunos autores sostienen que la privatización del uso de la fuerza no va a llevar a la instalación de un nuevo imperialismo o a la globalización de sistemas democráticos, sino más bien a una época neomedieval en la que prevalecerá un desorden continuo. La privatización del uso de la fuerza sería el signo premonitorio de esa situación. Ver Philip Cerny, "Neomedievalism, Civil War and the New Security Dilemma: Globalization as Durable Disorder", *Civil Wars*, Vol. 1, Nº 1, primavera 1998.

antigua URSS se encuentran desamparados y a menudo acuden a las empresas privadas de seguridad, hipotecando en muchos casos sus recursos naturales para pagar los servicios que éstas les proporcionan para mantenerse en el poder.

La desmovilización militar de las grandes potencias al finalizar la Guerra Fría ha arrojado al mercado de trabajo a miles de profesionales de la guerra, bien formados y entrenados por sus respectivos gobiernos, que se han encontrado en el paro dispuestos a aceptar contratos de las empresas privadas de seguridad. Además, el triunfo de la economía de mercado, que se ha globalizado a nivel mundial, ha ofrecido la posibilidad a muchos gobiernos neoliberales, como los de EEUU y el Reino Unido, entre otros, de privatizar cada vez más los dos sectores principales del uso de la fuerza: el del mantenimiento del orden público interno y el sector militar de cara al exterior.³

Igualmente, muchas compañías transnacionales, organizaciones internacionales y ONG que operan en países en los que reina la anarquía y cuyos gobiernos son incapaces de asegurarles protección, se han dejado seducir por las empresas privadas militares y de seguridad que contratan para proteger a sus empleados, locales, transportes y convoyes.

El surgimiento de las empresas privadas de seguridad

Los mercenarios han existido siempre, pero a lo largo de la historia ha habido dos grandes tendencias: la utilización de los ciudadanos para la guerra, como hicieron el Imperio Romano y la mayoría de los países después de la Revolución Francesa, y la utilización de mercenarios, como hicieron Aníbal y las ciudades italianas del Renacimiento.

Después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a surgir empresas privadas de mercenarios.⁴ Asimismo, durante el proceso de descolonización que se produjo en las décadas de los sesenta y setenta, las antiguas potencias coloniales, para salvaguardar sus intereses

³ No es una casualidad que sean las empresas privadas de estos dos países las que están más presentes y ofrecen más servicios militares y de seguridad a nivel internacional. Les siguen las empresas de Suráfrica, Francia, Israel, Australia y Canadá. Deborah D. Avant, *The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security*, Universidad de Cambridge, Cambridge, 2005.

⁴ En Gran Bretaña, por ejemplo, ex miembros de los Special Air Services (SAS) se constituyeron en empresas comerciales. David Sterling, fundador de los SAS, está en el origen de la empresa Watchguard Organisation, que entrenaba a los mercenarios que trabajarían para salvaguardar los intereses del Foreign Office. En <http://intelligence.ifrance.com/mercenaires.htm>. Pero este fenómeno no se limitaba únicamente a Gran Bretaña. Otros países con estructuras eficaces de espionaje funcionaban en esa época exactamente de la misma manera. Durante el *apartheid*, los militares y servicios de espionaje surafricanos operaban en las guerras que se desarrollaban en África Meridional (Namibia, Mozambique y Angola). Cuando fueron desplazados de sus funciones por el nuevo régimen democrático de Nelson Mandela, crearon la Executive Outcomes, una de las empresas privadas militares más importantes, con operaciones en Angola, Sierra Leona, Argelia, Ghana, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Zambia y, probablemente, Burundi, Colombia, Namibia y Uganda. *Ibidem*.

comerciales, particularmente en África, se sirvieron de mercenarios para luchar contra los movimientos de liberación nacional que reivindicaban el derecho de libre determinación de los pueblos. Después los mercenarios han continuado actuando esporádicamente en algunos conflictos armados. Pero el fenómeno de las empresas privadas de seguridad no se desarrollaría hasta 1989 con el fin de la Guerra Fría.

Actualmente se estima que existen alrededor de 300.000 empresas privadas militares o de seguridad que generan en torno a 150.000 millones de dólares anuales a través de sus contratos.⁵ Frente al secreto y la reserva de los mercenarios tradicionales, muchas de esas empresas disponen de portales en Internet, de servicios de relaciones públicas y de documentación destinados a la prensa y a futuros clientes. Estas sociedades ofertan en el mercado internacional servicios muy diversificados, llevando a cabo operaciones de logística, mantenimiento del orden público, asistencia, asesoría y seguridad militares, entrenamiento, capacitación y formación militar, inteligencia militar, etc.; actividades y funciones que estaban tradicionalmente reservadas a miembros de la policía y del ejército. También proporcionan seguridad a más de 100 países, ya sea a través de sus propios empleados, mediante la capacitación del personal local o, en algunos casos, en los teatros de operaciones al lado de las fuerzas militares regulares. Estas nuevas empresas están legalmente constituidas, poseen personalidad jurídica y disponen de recursos humanos importantes, así como de un material eficaz y de mandos experimentados que provienen de la élite de las más prestigiosas instituciones.

No sólo los gobiernos contratan sus servicios de seguridad. También lo hacen compañías transnacionales como BP, Shell, British Airways, General Motors y Coca-Cola, los servicios diplomáticos de muchas embajadas de países democráticos que se encuentran en zonas peligrosas o de conflicto como Bagdad,⁶ organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el

Existen
alrededor
de 300.000
empresas
privadas de
seguridad

⁵ Las ganancias de las empresas privadas de seguridad han pasado de unos 55.000 millones de dólares anuales en 1990 a más de 150.000 en la actualidad. En www.alertnet.org

⁶ La empresa de seguridad surafricana Meteoric Tactical Solutions, por ejemplo, tenía un contrato con el Gobierno suizo para proteger a los diplomáticos de su embajada en Bagdad. El personal de dicha empresa está probablemente integrado por militares o policías del régimen del *apartheid* reconvertidos y con un historial poco claro, sin que ello preocupe lo más mínimo al embajador suizo en Irak. El escándalo del golpe de Estado fallido en Guinea Ecuatorial con ramificaciones en Suráfrica y Zimbabue puso de relieve el lado oscuro de las operaciones de esa empresa. En este último país, las autoridades detuvieron, en la primavera de 2004, un avión cargado de material bélico con unos 70 mercenarios, entre ellos dos surafricanos propietarios de Meteoric Tactical Solutions implicados en la tentativa de golpe de Estado para derrocar al presidente Teodoro Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial. Como consecuencia, el Gobierno suizo tuvo que cambiar de empresa, sin que la nueva fuese más transparente que la primera

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y ONG como CARE, Caritas, USAID y World Vision. Asimismo, las empresas privadas de seguridad son contratadas por regímenes dictatoriales, grupos rebeldes, carteles de la droga e incluso grupos terroristas.⁷

La contratación de profesionales de la seguridad que trabajan para las empresas privadas es un tema de gran actualidad y que está en constante progresión. Con la mundialización de la economía, el uso de la fuerza se ha convertido simplemente en un negocio más que hay que privatizar a toda costa. Durante la primera guerra del Golfo, a principios de 1990, uno de cada 50 soldados era un empleado de una empresa privada de seguridad. Pocos años después, durante las guerras en la ex Yugoslavia –particularmente en la de Bosnia-Herzegovina–, la proporción había pasado ya a uno de cada diez. Los conflictos en la ex Yugoslavia, Angola, Colombia y Sierra Leona, por poner sólo algunos ejemplos, han favorecido la multiplicación de estas empresas. Pero ha sido a raíz de las guerras de Afganistán y de Irak y de la inestabilidad de la posguerra en esos dos países cuando las empresas privadas militares y de seguridad han experimentado el mayor auge.

En 2003, el Secretario de Defensa de EEUU estimaba en unos 20.000 los efectivos de las empresas privadas de seguridad en Irak, lo que representaba el 15% de los 173.000 efectivos desplegados por las Fuerzas Armadas de la coalición en ese país (de los cuales 155.000 eran estadounidenses). Las empresas privadas militares y de seguridad constituyeron en 2003 la segunda fuerza de ocupación, por detrás del ejército de EEUU. Dos años después se calculaba que en Irak había alrededor de 100.000 personas contratadas para trabajar con las fuerzas estadounidenses de ocupación en tareas de seguridad y también en servicios de logística, transporte, construcción, alimentación, etc.⁸

Al igual que las empresas transnacionales, las privadas de seguridad tienen gran facilidad para desplazarse de un Estado a otro cuando consideran que las normas que un gobierno les impone son demasiado estrictas. Pueden establecer *holdings*⁹ o sucursales en otros

respecto a sus actividades y al pasado de sus empleados. En www.sourcewatch.org. Ver también el reportaje "Guerriers à louer", emitido en el espacio *Temps Présent* de la cadena de televisión suiza Suisse Romande el 13 de mayo de 2004.

⁷ Peter W. Singer, *The Private Military Industry in Iraq: What Have We Learned and Where Next?*, Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas, Ginebra, 2004a. La empresa de seguridad israelí Spearhead Limited, dirigida por un ex teniente coronel del ejército de ese país, habría suministrado asistencia militar a los jefes de los carteles de la droga Pablo Escobar y José Gonzalo Rodríguez Gacha, así como a los escuadrones de la muerte de paramilitares de extrema derecha. Estos grupos están presuntamente implicados en los asesinatos de dos candidatos a la presidencia de Colombia y en el atentado contra un avión de línea en el que perecieron más de 100 personas. Ver también Peter W. Singer, *Corporate Warriors*, Universidad de Cornell, Nueva York, 2004b.

⁸ En www.alertnet.org

⁹ Muchas de las empresas privadas de seguridad forman parte de *holdings* del transporte, de las comunicaciones o de la asesoría económica que les permiten participar en servicios más amplios. Naciones Unidas, Informe del Relator Especial, A/52/492, 1997.

países –como hizo Sandline International en las Bahamas– u operar a través de compañías subsidiarias. Asimismo, para evitar pagar impuestos o que les congelen los bienes, estas empresas se instalan a menudo en paraísos fiscales.¹⁰

Los profesionales de la seguridad

Los profesionales empleados en las empresas privadas de seguridad provienen en su mayoría de Suráfrica, EEUU, Reino Unido e Israel, pero también de Chile, Bosnia, Nepal, Fiyi, Filipinas y varios países africanos y del Este de Europa (aunque últimamente también se está reclutando a peruanos y ecuatorianos). Suelen ser ex militares de alto rango pertenecientes a los más prestigiosos cuerpos, como el ex teniente coronel Tim Spicer del Scots Guards británico o el ex oficial británico Simon Mann, ambos cofundadores de la empresa privada Sandline International. Muchos de los profesionales de la seguridad mejor pagados en Irak provienen del Special Air Services (SAS) británico, un regimiento de comandos de élite considerado como una de las mejores fuerzas especiales en el mundo.¹¹

Generalmente se trata de hombres y mujeres formados dentro del código militar o de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley. Las empresas privadas de seguridad no tienen una plantilla fija de profesionales, sino que trabajan a partir de bancos de datos, redes y listas que contienen los nombres de ex policías y ex militares y también los de policías y militares en activo que, ante los salarios que les ofrecen, no dudan en pedir permiso para ausentarse de su trabajo. Al no molestarse en averiguar el pasado de estos profesionales, las empresas contratan también a individuos con un pasado turbio.¹² Algunos miembros del personal de las empresas privadas de seguridad han servido a regímenes militares represivos. Se cree que muchos de los surafricanos que trabajan en Irak y que, entre otras actividades, están entrenando, capacitando y formando a la policía iraquí, provienen de la policía y del ejército surafricanos del *apartheid*. Un ejemplo es el de un ex soldado surafricano que habría admitido haber hecho explotar bombas en los domicilios de 60 activistas políticos en Suráfrica.¹³ Los chilenos que la empresa estadounidense de seguridad Blackwater ha contratado para operar en Irak habrían servido a la dictadura de Pinochet. En 2004, la ex ministra de Defensa de Chile, Michelle Bachelet, preocupada por la marcha de numerosos soldados chilenos que iban a trabajar en empresas privadas militares, ordenó una investiga-

¹⁰ Damian Lilly, *Regulating Private Military Companies: The Need for a Multidimensional Approach*, Alerta Internacional, Londres, 2002. En www.fco.gov.uk/Files/kfile/pmlclilly.pdf

¹¹ Pratap Chatterjee, "Give War a Chance: the Life and Times of Tim Spicer", Corp Watch, junio de 2004. En <http://corpwatch.live.radicaldesigns.org/article.php?id=11361>

¹² Peter W. Singer, 2004a, *op. cit.*

¹³ *Ibidem.*

ción para averiguar si esos reclutamientos se hacían de acuerdo a las leyes chilenas.¹⁴ Dos diputados demandaron por asociación ilícita a la empresa Grupo Táctico Blackwater, subsidiaria chilena de la transnacional Blackwater de Carolina del Norte, por reclutar a ex militares chilenos para utilizarlos en Irak.¹⁵

El personal mejor capacitado por las instituciones militares se va a trabajar con las empresas privadas, que pueden pagar de dos a diez veces más por las mismas funciones

Ambigüedades y paradojas

Si un militar comete un crimen de guerra se le juzga de acuerdo con el código militar de su país. Pero los empleados de las empresas privadas de seguridad, al tener un estatuto de civiles, aunque estén armados y participen en los combates, plantean una ambigüedad jurídica cada vez que cometen un delito. La cuestión se complica aún más por el hecho de que el personal de estas empresas está compuesto a menudo por nacionales de otros países donde están registradas dichas sociedades.

La competencia entre el sector militar público y el privado conduce paradójicamente a situaciones en las que el personal mejor capacitado por las instituciones militares, así como las lumbreras que salen de las academias militares más prestigiosas, se van a trabajar con las empresas privadas, que pueden pagar de dos a diez veces más por las mismas funciones. Estos profesionales pueden ganar hasta 200.000 dólares anuales exentos de impuestos. Los militares son conscientes de que las empresas de seguridad llenan un vacío en los ejércitos modernos –dotados con menos efectivos a raíz de los cambios producidos desde el fin de la Guerra Fría– y de que sin ellas no podrían realizar todas las tareas, pero al mismo tiempo están sumamente preocupados por la nueva situación. Esa ambigüedad se refleja también cuando los militares vislumbran las posibilidades de una segunda carrera, una vez jubilados, que las empresas privadas de seguridad les ofrecen al darles la oportunidad de seguir ejerciendo una profesión que conocen bien y por la que tienen gran apego.

Algunas actividades como la subcontratación de tareas técnicas de logística (limpieza de minas, etc.), poco sensibles pero costosas, no presentarían grandes problemas y no tendrían

¹⁴ Bill Berkowitz, "Mercenaries 'R' US", Alter Net, marzo de 2004. En www.alternet.org/story/18193/

¹⁵ En www.navarro.cl/defensa/mercenarios/index.htm

repercusiones. Sin embargo, existen otras según se va pasando a operaciones más sensibles en las que las empresas privadas actúan en una zona gris, como la seguridad de instalaciones públicas (protección de embajadas, de oleoductos, de cárceles privadas, etc.) y el mantenimiento del orden público (acciones antisindicales, vigilancia de personalidades subversivas influyentes, etc.) en las que se corre el riesgo de violar los derechos humanos. A veces incluso se realizan actividades de entrenamiento de fuerzas militares en las que la capacitación y el adiestramiento de un ejército pueden transformarse en una ayuda encubierta al servicio de uno de los beligerantes. Los asesores militares se convierten entonces, como ocurrió en Angola y Sierra Leona con los asesores de Executive Outcomes en la década de los noventa, en mercenarios que participan directamente en los combates.¹⁶

Las empresas de seguridad operan en una zona oscura y poco transparente que incluye un amplio abanico de actividades. Algunas de ellas tendrían que estar reglamentadas y controladas, mientras que otras deberían prohibirse. En la segunda categoría se incluyen la participación directa en las hostilidades; el uso, reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios; la ayuda a gobiernos que no están internacionalmente reconocidos a actores no estatales o a fuerzas irregulares; las acciones que podrían violar los derechos humanos o provocar una represión interna; el saqueo, explotación y otras actividades económicas ilícitas como la extracción de minerales; y el negocio de armas.¹⁷

El objetivo primordial de las empresas privadas es obtener el máximo beneficio de las actividades para las que son contratadas, lo que les aproxima a los mercenarios cuya motivación principal es el provecho personal.¹⁸ Según International Alert, que ha establecido unos criterios para distinguir a las empresas privadas de seguridad de los mercenarios, aquellas se clasificarían como mercenarias si responden a la definición de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, verbigracia: participación directa en las hostilidades, no estar completamente integradas en las fuerzas armadas de sus clientes y contratos cuya base es esencialmente el provecho personal.¹⁹ Los intereses estatales de política exterior o la cuestión de la seguridad colectiva están ausentes de las preocupaciones de las empresas privadas de seguridad. Sus objetivos son, por lo general, a corto plazo, con miras a estabilizar los conflictos de

¹⁶ En los contratos no está estipulada la implicación militar de la empresa privada, pero en el terreno los "soldados de fortuna" pueden en todo momento participar directamente en los combates.
En <http://intelligence.ifrance.com/mercenaires.htm>

¹⁷ Chakola Beyani y Damian Lilly, *Regulating Private Military Companies: Options for the UK Government*, Alerta Internacional, 2001.

¹⁸ Por ejemplo, la empresa Halliburton pagaba más cara la gasolina al Gobierno de EEUU de lo que se cotizaba en el mercado. Además, obligaba al Gobierno a pagar comidas que nunca había proporcionado al ejército norteamericano. El Pentágono tiene un litigio con Halliburton en relación con unos 1.800 millones de dólares que dicha empresa reclama por sus servicios en Irak.

¹⁹ Chakola Beyani y Damian Lilly, 2001, *op. cit.*

los países en donde operan sin tener en cuenta los problemas políticos, económicos y sociales que están en el origen de la guerra y que se deben resolver a largo plazo. Las empresas privadas no constituyen una opción viable que pueda reemplazar una política tendente a desarrollar en el país una policía y unas fuerzas militares nacionales democráticas.

Las empresas privadas de seguridad subcontratadas por un gobierno o por fuerzas de la oposición (guerrilla) para desempeñar actividades militares juegan un papel determinante en el suministro de armas. Al estar relacionadas con gobiernos, fabricantes y traficantes de armas y compañías aéreas, se encuentran en una posición idónea para importar armamento de forma ilícita.²⁰ En 1998, la empresa de seguridad británica Sandline International recibió un contrato en Canadá de un hombre de negocios tailandés, Rakesh Saxena, para recuperar las concesiones mineras de diamantes y bauxita que había perdido en Sierra Leona a raíz del golpe de Estado que depuso al presidente Ahmed Tejan Kabbah. Sandline debía vender 30 toneladas de armamento a las fuerzas del ex mandatario, contraviniendo así al embargo impuesto por Naciones Unidas (resolución del Consejo de Seguridad 1132). El proyecto de Sandline provocó un escándalo en Gran Bretaña. La investigación oficial descubrió que dicha empresa suministraba armas a ambas partes del conflicto armado en Sierra Leona violando el embargo de la ONU.²¹

A modo de reflexión

Las actividades de las empresas privadas militares y de seguridad plantean importantes problemas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En primer lugar, hay que preguntarse hasta qué punto los Estados están dispuestos a ceder su prerrogativa de detentadores del uso de la fuerza a estas empresas sin que ello ponga en peligro su propia soberanía. Sin normas que regulen sus actividades a nivel nacional, ¿qué mecanismos de control se deberían establecer? Y en el ámbito internacional, ¿hasta dónde respetan dichas empresas los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? Puesto que las disposiciones de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de los mercenarios son difíciles de aplicar a estas empresas, ¿qué se puede hacer para que los Estados cumplan con sus obligaciones en el marco del derecho internacional, ya que no pueden deshacerse de ellas por el hecho de que son las que ejecuten las actividades militares y de seguridad? Los Estados tienen la obligación de tomar las medidas adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos y, en el caso de que éstas ocurran, perseguir y sancionar a los autores.

²⁰ "Le grand bazar des armes", *Le Monde Diplomatique*, noviembre de 2004.

²¹ Chatterjee, 2004, *op. cit.*

Gran parte del problema radica en que la mayoría de esas empresas privadas argumentan que sus servicios son puramente de protección (defensivos) y que ni se implican en las hostilidades ni entran en combate. Pero, ¿cómo distinguir entre apoyo o protección a los combatientes e implicación en el conflicto? Máxime cuando los propios empleados de las empresas privadas se ven involucrados en hostilidades y tienen que hacer uso de las armas aunque sólo sea para protegerse, como ocurre a diario en Irak.

Las empresas privadas militares y de seguridad prefieren regirse por códigos de conducta voluntarios; los obligatorios les exigen acatar normas legales y rendir cuentas de acuerdo a normas éticas y obligaciones de respeto de los derechos humanos

La mayoría de las empresas privadas de seguridad que operan en Irak, Afganistán, África o América Latina actúan con el consentimiento de los gobiernos, ya sea porque han sido contratadas por las autoridades del país en donde están registradas o porque han obtenido su permiso —éste es el caso de muchas de las que trabajan en Irak y en Colombia al servicio del Gobierno de EEUU—, o bien porque tienen el visto bueno del gobierno del país en el que operan. Eso sí, sin que haya normas precisas a nivel internacional que regulen la exportación o la importación de los servicios que proveen dichas empresas o simplemente, si son nacionales que actúan en su propio país, sin normas en el ámbito nacional.

Debido a la poca transparencia y a la falta de fiscalización, ya que no rinden cuentas a nadie excepto a los accionistas, la expansión y desarrollo de los servicios de las empresas privadas militares y de seguridad plantea a los países y a la comunidad internacional problemas éticos de gran envergadura. Estas empresas, al igual que otras muchas, prefieren regirse por lo que se conoce como códigos de conducta voluntarios que establecen su responsabilidad social, a estar reguladas por códigos de conducta obligatorios que les exigen acatar normas legales y rendir cuentas de sus actividades de acuerdo a normas éticas y obligaciones de respeto de los derechos humanos. Actualmente no existen mecanismos a nivel nacional o internacional que vigilen, investiguen y controlen sus comportamientos. No obstante, ya se percibe en la sociedad civil una inquietud y una demanda respecto a la denominada responsabilidad social de las empresas (*corporate social responsibility*), que ha dominado las relaciones de las empresas en estos últimos quince años plasmándose sus principios voluntarios en el Pacto Mundial y las Cumbres Mundiales de la ONU, con la petición de rendimiento social de cuentas por parte de las empresas (*corporate social accountability*) y de que se asegure que éstas tienen obligaciones legales de respetar las normas internacionales.²²

²² Andrew Clapham, *Human Rights Obligations and Non-State Actors*, Universidad de Oxford, Oxford, 2005.

La cuestión que se plantea ahora es si se debe considerar a los empleados de las empresas privadas militares y de seguridad como mercenarios. Aunque dichas empresas desarrollan una gran variedad de actividades que no son mercenarias, existe al menos una que tiende hacia los mismos objetivos y que es el motor principal tanto para los mercenarios como para las empresas privadas: el provecho personal para aquéllos y el beneficio para la empresa capitalista. Ambos están en la base de las nuevas actividades mercenarias del siglo XXI. Los individuos que las ejecutan establecen fácilmente el puente entre las acciones de empresas privadas de seguridad y las de grupos de mercenarios o individuos aislados.²³

²³ La tentativa de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial en marzo de 2004, en la que estuvieron implicados, entre otros, dos dirigentes de la extinguida Executive Outcomes (el británico Simon Mann y el surafricano Nick du Toit), dos propietarios de la surafricana Meteoric Tactical (Hermanus Carsle y Lourens Horn) y, aparentemente, también Mark Thatcher, encargado de fletar el helicóptero que debía transportar al jefe de la oposición en el exilio, Severo Moto, tras haber derrocado al presidente de Guinea Ecuatorial,